

México: ¿El retorno del Estado desarrollista?

Por Emelio Betances
LAP Participating Editor

Lo más innovador de la gestión de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) en el contexto latinoamericano actual es su propuesta de rescate del Estado desarrollista. “El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas coherentes y como articulador de propósitos nacionales” (Gobierno de México, 2019:10). En este ensayo se plantea que durante el primer año de gestión se ha empezado un proceso de transformación que va teniendo cierto éxito en el aspecto político y social, pero queda pendiente la economía cuyo crecimiento se mantuvo en cero, la violencia del narcotráfico que no se logró disminuir y el partido gobernante sigue enfrascado en una lucha de facciones políticas.

Valorar las luces y las sombras del primer año de la gestión de Amlo requiere que se le ponga en el contexto regional e internacional. A nivel latinoamericano, la victoria de Amlo en julio de 2018, se da en un contexto de auge de la derecha y retroceso en los procesos de cambio en Venezuela y Ecuador. A esta situación se añade la victoria del derechista Jair Bolsonaro en Brasil en octubre de 2018 y, posteriormente, en noviembre de 2019, la destitución de Evo Morales por un golpe de Estado cuyas consecuencias todavía no se logran medir en su justa dimensión. En octubre de 2019, la victoria de Alberto Fernández en Argentina contra el derechista Mauricio Macri es lo único que se aproxima a la tendencia anti-neoliberal que Amlo proclama desde México, todavía es temprano para determinar cuan radical será el anti-neoliberalismo de Fernández. Por ahora, luce

que este será mucho más moderado que aquel de los denominados gobiernos progresistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

A nivel internacional, la gestión de Donald Trump sirve de apoyo al auge de la derecha hegemónica en América Latina. Estados Unidos ha sostenido al autoproclamado “presidente de Venezuela,” Juan Guaidó, ha dado su apoyo incondicional a los golpistas de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez. En ambos casos, se pretende echar atrás las conquistas políticas y sociales que se han logrado por Gobiernos progresistas. A esta situación política, se debe añadir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que en 2019 el crecimiento de la economía mundial sería de 3.0% y mientras que la CEPAL estimaba que en América Latina este sería de 0.1%. En comparación al promedio de la región, el desempeño económico de México se quedó en cero, a esto hay que añadir que los niveles de desigualdad social son apabullantes (más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza y 69 millones de personas no tienen acceso a las prestaciones de salud) pues el tejido social se ha tensado casi hasta el extremo y la lucha contra la delincuencia organizada ha desangrado a una gran parte de la sociedad y minado los recursos del Estado.

En este ensayo se procura demostrar que Amlo ha tenido retos gigantescos para enfrentar los grandes problemas nacionales. Se argumenta que su enfoque es anti-neoliberal, pero moderado; no se propone cuestionar las bases del sistema capitalista sino más bien fortalecerlas para asegurar un modelo de “capitalismo con rostro humano,” que atienda las necesidades básicas de la población. Dadas las circunstancias del mundo actual y de México, en particular, la gestión de Amlo muestra muchas más luces que sombras durante su primer año de gestión.

Amlo en la política

Amlo hizo una carrera política en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) antes de crear el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual ha sido un fenómeno nuevo en la vida política nacional. Su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005) y sus dos campañas por la presidencia en 2006 y 2012 lo colocaron como alternativa a los políticos neoliberales. Estas dos elecciones le fueron arrebatadas en fraudes colosales, pero volvió con fuerza, registró a Morena como partido político en 2014 y para 2018, se aprovechó de que los partidos dominantes estaban de capa caída y de una extrema desigualdad socialmente irritante que ha empezado a obstaculizar el crecimiento económico. Esta situación ayudo para que Amlo lograra 30,100,00 votos, superando a todos sus contrincantes juntos en el torneo.

El gran dilema del huachicol

El *huachicol* (robo de hidrocarburo) fue el primer gran desafío. Siguiendo la modalidad que se había impuesto durante las gestiones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en noviembre de 2018, los *huachicoleros* se robaron 81,000 barriles diarios de gasolina y para diciembre 2019, ya estando en el poder, se llevaron, 74,000. Se sabía que el *huachicol* no era noticia cómo lo demuestran las obras de Ana Lilia Pérez (2011) y (2019), donde se describe el hurto de combustibles y la corrupción. Pérez muestra como una parte de la sustracción se efectuaba desde la presidencia de la República en combinación con la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Ciudad de México (CDMX). Desde allí se dirigía el ordeño de los tubos que transportan la gasolina y el gas por todo el país.

Amlo se dio cuenta que él solo no podía dismantelar la red nacional de corrupción y que tenía que formar alianzas para mantenerse en el poder. La primera de estas sería con las Fuerzas Armadas (FFAA), a quienes necesitaba para combatir la delincuencia organizada. Se les acercó y les ofreció un papel adicional: la construcción y administración de un aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucia, la formación de la GN, la protección de los camiones tanques que transportan combustibles y de los tubos que se usan para transportar gasolina y gas. La formación de la GN era un reto pues exigía que se modificara la Constitución, lo cual requería la votación de 2/3 de los miembros del Congreso y la mayoría de las legislaturas locales. Todo esto se logró por votación unánime para marzo de 2019.

Se tuvo que comenzar a proteger los tubos que transportan los combustibles antes de que se autorizara la modificación a la Constitución para permitir que legalmente los militares participaran en cuestiones de seguridad interna, pero al romperlos los *huachicoleros* provocaron incendios y explosiones causando la muerte de más de 140 personas; estas detonaciones siguieron ocurriendo en enero y febrero de 2019, obligando a las autoridades a cerrar el transporte de gasolina por tubo y teniendo que transportarla en camiones tanques con la protección del Ejército. Esta situación causó una gran escasez de gasolina en el país, poniendo en peligro el apoyo que el Gobierno tenía en la población. En medio de la crisis, se decidió comprar 200 camiones tanques valorados en 100 millones de dólares para sustituir todos los tubos que picaban; estos se cerraron y una parte del combustible se hacía en camiones. Se logró controlar el robo de combustibles y para febrero éste había descendido a 9 mil barriles diarios y en los meses subsiguientes se mantuvo entre 5 y 4 mil barriles (Conferencia matutina de Amlo, 23 de abril y 4 de noviembre 2019). La sustracción de combustibles se había transformado en un

medio de vida; hay lugares del país con alta inseguridad en donde las gasolineras han cerrado y esta es la única forma de conseguir gasolina.

La batalla por el aeropuerto de Santa Lucia

El aeropuerto de la base aérea de Santa Lucia es emblemático de los proyectos desarrollistas llevados a cabo por el Estado. Peña Nieto había iniciado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM) en el lago de Texcoco, otorgando contratos a compañías nacionales y extranjeras, las cuales habían empezado a construir las obras negras en las cuales se habían invertido millones de dólares. Durante su campaña electoral, Amlo había prometido que suspendería la construcción del NAICM porque se estaba construyendo en terrenos movedizos que se hundirían con el aterrizaje de grandes aviones. Esta situación requeriría de grandes inversiones para reparar continuamente las pistas de aterrizajes, lo cual sería un gran negocio para las empresas constructoras.

Las empresas inmobiliarias esperaban hacer negocios con los terrenos liberados del aeropuerto Benito Juárez y del área circundante. Asimismo, se planteaba que se había cerrado el aeropuerto de Toluca, también cercano a la CDMX, para congestionar el viejo aeropuerto y así justificar la construcción de uno nuevo aeropuerto. El Gobierno decidió suspender la construcción del NAICM y negoció con las compañías que habían invertido de modo que no perdieran su capital y pudieran invertir en Santa Lucia. En busca de apoyo a su proyecto, Amlo se reunió en asambleas en pueblos vecinos de Santa Lucia y allí, a mano alzada, le dieron su apoyo. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la derecha que empezó una cruzada de 103 amparos ante tribunales que parecían hacerles el juego a empresas organizadas en un movimiento empresarial denominado

#Nomasderroches. Se argumentaba que la construcción del aeropuerto en Santa Lucia causaría graves daños ambientales y que afectaría a las poblaciones cercanas. Se olvidaba del daño ecológico que causaba la construcción del NAICM. Por su parte, Amlo argumentaba que la base aérea de Santa Lucia se había construido en los años cincuenta y que, contrariamente a Texcoco, allí había un suelo firme que resistiría los aterrizajes de aviones grandes y que los daños ambientales serían menores. Además, replicaba que el NAICM costaría 300 mil millones de pesos mientras que el de Santa Lucia costaría 100 mil millones. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) argumentó ante un tribunal que, por razones de seguridad nacional, se debía construir el aeropuerto en Santa Lucia. Esto matizó el debate sobre los amparos y la Suprema Corte de la Nación, acogió la propuesta de la SEDENA y autorizó, a fines de octubre de 2019, que empezara la construcción del aeropuerto.

Este conflicto mostró a Amlo que debía tener cuidado con el uso de las consultas populares a mano alzada para decidir la construcción de obras. Recuérdesse que hubo consultas de este tipo en otros lugares donde el presidente buscaba congratularse con la población. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso sobre consultas populares. En noviembre de 2019, el Congreso modificó la Constitución para garantizar el uso de las consultas populares.

La consulta sobre el Tren Maya e implicaciones geopolíticas

El Gobierno quiere evitar amparos en la construcción del Tren Maya en el sureste y anunció el 10 de noviembre que, si el pueblo no quiere el tren, éste no se construirá. Se inició una campaña para promover un tren que tendrá 1,460 kilómetros, se invertirá 120 mil millones de pesos, se tiene derechos de vía, carretera y tendido eléctrico. Se enfatizaba que esta obra traerá muchos empleos a la región, se negociará con los ejidatarios cuyas tierras sean afectadas y se

procurará que haya una mínima afectación ambiental (Conferencia de matutina de Amlo, 15 de noviembre 2019). La consulta realizada el 14 y 15 de diciembre, fue un éxito según el Gobierno: en 15 asambleas regionales se consultó a 100,940 personas de las cuales 92.3% votó a favor y 7.4% en contra (Conferencia Matutina de Amlo, 16 de diciembre 2019). La obra se licitará a partir de enero de 2020 y la construcción empezará en marzo.

Sin embargo, la consulta fue cuestionada por la oficina del Alto Comisionado de las ONU para los derechos humanos, la cual envió observadores a 4 de las 15 asambleas regionales y señaló que “la información presentada solo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar” (Langner, 19 de diciembre de 2019). Asimismo, puso énfasis en la ausencia de estudios de impacto ambiental o la falta de difusión para que las personas pudieran definir su posición. El Gobierno respondió “calificando de aventurado y sin fundamento” el comunicado e indicando que la ONU-DH-México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora (La Jornada, 24 de diciembre 2019). Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consideró la consulta como una “simulación” para entregar los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. No cabe duda que este tema podría abrir flancos difíciles en el próximo año y podría aparecer una oposición social a los proyectos del Gobierno, y esto, claro, podría minar el apoyo que se tiene en la población.

Por otro lado, no se puede obviar que el Tren Maya es parte de dos megaproyectos de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán: la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y una vía de comunicación entre Salina Cruz, Oaxaca y el Coatzacoalcos, Veracruz, la cual incluirá una zona franca. Es cierto que estas obras crearán empleos, pero eso no quiere decir que se impulsará un desarrollo balanceado para la región pues en los

países donde estas operan no han promovido el desarrollo sino empleos con baja calificación y salarios míseros. Sin duda, aquí aparece un aspecto oscuro en los planes del Gobierno pues, contrario al discurso oficial, se da prioridad al desarrollo de proyectos capitalistas de envergadura, ignorando como estos pueden afectar la vida social en las comunidades y regiones.

Según Ana Esther Ceceña, se trata de una obra de “envergadura geopolítica y los efectos estratégicos de transformación de la región del sureste colocan al proyecto como punto nodal del tránsito del mercado mundial y, por tanto, de la guerra por el control global” (citada por Fazio, 2019). El Istmo de Tehuantepec ha sido codiciado por los estadounidenses desde mediados del siglo XIX y cabe preguntarse en qué medida estarán implicados en estos proyectos. Lo mismo podrá decirse de China, Japón y Singapur, cuyo Primer Ministro ya visitó México interesado en participar en la ampliación del puerto de Salina Cruz. Ahora bien, los megaproyectos desarrollistas impulsados por el Estado no se limitan al aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya, sino que se extienden a otros de gran amplitud.

El rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Pemex y la CFE son dos empresas estratégicas que la nueva gestión quiere utilizar para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, para efectuar estos proyectos no quiere alterar la reforma energética que se realizó durante el sexenio de Peña Nieto, con la cual se redujo la capacidad productiva de Pemex, se aumentó su deuda e hizo que México pasara de productor a importador de petróleo. En la actualidad, el Gobierno importa 800,000 barriles de diarios de gasolina y produce alrededor de 200,000. Se quiere revertir esta situación a través de la reparación de seis refinerías y la construcción de una nueva, en la cual se invertirá 8,500 millones de dólares.

El rescate de Pemex es uno de los grandes desafíos de Amlo pues tiene una deuda que supera los 100 mil millones de dólares. El secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que se ha designado 86,000 millones de pesos en el presupuesto nacional de 2020 para ayudar en su desempeño (Conferencia matutina de Amlo, 9 de septiembre 2019). Por otro lado, el 6 de diciembre se anunció que Pemex encontró un pozo en Tabasco que tiene una reserva posible de 500 mil barriles de petróleo. Se espera que esta noticia tenga algún efecto sobre las evaluaciones de las calificadoras internacionales, las cuales consideran que la inversión del Gobierno es insuficiente para resolver los problemas de la petrolera. El Gobierno argumenta que ya tiene 20 campos petroleros en producción en aguas someras y tierra firme y Pemex será un motor de crecimiento económico.

En cuanto a la CFE, la primera tarea que se le encomendó fue renegociar los contratos con las empresas que construyeron los tubos para el transporte de gasolina y gas. Estas negociaciones concluyeron el 27 de agosto y el 11 de septiembre del año en curso. Desde la campaña electoral, Amlo decía que estos eran contratos leoninos, que el Gobierno había invertido junto a las transportadoras y que las tarifas eran altas y las empresas se llevaban grandes utilidades. Una vez llegó al poder, insistió en la necesidad de renegociar los contratos. Sin embargo, intuyó bien que este era un hueso duro de roer. Llevar las empresas a tribunales internacionales donde, en teoría, se podría demostrar que estos contratos eran leoninos era costoso y desgastador políticamente. En el curso de las negociaciones, se olvidó de la acusación de contratos leoninos y se puso realista. Se trata de gaseoductos que llevan gas desde Texas a diferentes puntos del país y comprenden cientos de kilómetros. Las negociaciones se hicieron con una diversidad de empresas y los detalles varían de empresa a empresa y por el tamaño de los gaseoductos. Para que se tenga una idea, el gaseoducto que va desde el sur de Texas a Tuxpan, Veracruz transporta 2,600 millones de pies cúbicos diarios. La

empresa que maneja el gasoducto de La Laguna, Aguascalientes controla un gasoducto de 452 kilómetros y otro que va a Villa Reyes, Guadalajara tiene 374 kilómetros. Estos gasoductos atraviesan por el centro del país. El Gobierno logró ahorrar 4,500 millones de dólares de un monto de 12,000. Igualmente, logró que la tarifa de transportar el gas fuera plana y no se podrá aumentar. Pero, a cambio de estos logros, tuvo que reconocer la propiedad de los gasoductos por parte de las compañías y dejar que se ampliaran los contratos de 25 a 30 años dependiendo de la empresa (Conferencias matutinas de Amlo, 27 de agosto y 11 de septiembre de 2019).

Esta concesión no fue poca cosa. El tema de cuánto invirtió el Estado en la construcción de gasoductos y los problemas creados por los derechos de vía se quedaron a un lado. Tampoco se tocó el tema de la seguridad de los gasoductos cuya protección correrá a cargo del Ejército. Sin embargo, los proyectos de Pemex y la CFE constituyen los primeros pasos para que estas se conviertan en los motores de desarrollo de la economía.

La creación de la Guardia Nacional

La formación de la GN es otro pilar sobre el que descansa el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la seguridad. Debido a la carencia de una policía profesional el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear una entidad con capacidad para poner fin a la inseguridad (Gobierno de México, 2019:23-24). La GN es parte de la estrategia para poner fin a la “lucha contra el narcotráfico” que entre 2006 y 2018 causó la muerte a más de 200,000 personas. Durante sus primeros 5 años, que terminarán en 2023, la GN estará formada por elementos de Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, y contará con el apoyo de las instituciones castrenses para efectuar sus operaciones. Estará supeditada a la

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por un civil. En noviembre de 2019, la GN ya tenía 150 coordinaciones y 71,000 elementos. La idea es llevarla 140,000 efectivos distribuidos en 266 coordinaciones (Amlo, 2019:166). La GN cuenta con el apoyo de 70.9% de la población y no ha habido ninguna acusación contra sus miembros por violación a los derechos humano. Sin embargo, el problema es que han mostrado poca eficacia, lo cual no es bueno para su imagen y, peor aún, en la realidad política empieza a registrarse bajas en acciones directamente contra ellos.

La Guardia Nacional y la migración internacional

Las relaciones problemáticas entre México y Estados Unidos han desvirtuado el plan original de la GN. Cuando Amlo llegó al poder permitió que caravanas de migrantes de Honduras, Guatemala y el El Salvador entraran al país camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, durante el verano de 2019 Donald Trump amenazó a México con tarifas escalonaría que subirían primero en 5% y luego subirían hasta 25% entre los meses que van de julio a octubre. 5% de aumento en las tarifas significaría que México pagaría 17,000 millones de dólares en tarifas en los primeros meses y estas llegarían 25 por ciento en 2019. El secretario de Relaciones Exteriores se movilizó rápidamente y prometió que México procuraría detener la migración a través de su territorio a cambio de que no se les pusieran aranceles a las exportaciones. Trump le dio un plazo de 45 días para que resolviera el asunto. Mediante el uso de la GN México logró reducir la migración a Estados Unidos de 144,166 en mayo a 52,546 en septiembre (Conferencia matutina de Amlo, 26 de diciembre 2019).

México desplegó 6,000 efectivos de la GN en la frontera sur, pero a medida que las caravanas aumentaban tuvo que aumentar el número de elementos para

detenerlos. El 6 de septiembre se anunció que esta cifra aumentó a 10,500 en la frontera sur y 14,951 en la frontera norte. En total, son 25,451 guardias (Conferencia matutina de Amlo, 6 de septiembre 2019). Estados Unidos no pone un centavo para cubrir estos gastos. En México y Estados Unidos diversos observadores dicen que la GN se ha convertido en un gendarme gratuito que le resuelve problemas a Trump. Sin embargo, estos observadores parecen ignorar la asimetría entre los dos países: México tiene una frontera de 3,180 kilómetros con Estados Unidos y no tiene la capacidad económica ni militar para enfrentarlo. Necesariamente tiene que buscar la forma de negociar y colaborar en lugar de entrar en conflictos. Esto explica por qué el Secretario de Relaciones Exteriores se limita a decir que México aplica la Ley Nacional de Migración mientras negocia con Estados Unidos. Ahora bien, no se puede negar que esta relación desvirtúa el plan original de la GN que era proteger a la población de la delincuencia organizada.

Amlo ha planteado que debe buscarse la solución a los problemas migratorios en sus causas (Amlo, 2019:99-100). México dispone de un fondo de 60 millones de dólares para atenuar el problema migratorio. Se informa que Estados Unidos promete 2 mil millones de dólares, pero hasta ahora sólo ha aportado 800 millones para Centroamérica y 126 millones para ayudar a microempresas en el sur de México (Conferencia matutina de Amlo, 6 de septiembre 2019). En relación a Centroamérica, los proyectos de México se limitan a promover el programa Sembrando Vida, cuyo fin es reforestar y crear empleos en el campo, pero con recursos limitados.

Aunque México no quiera ha tenido que manejar el tema migratorio en relación con las negociaciones del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y ha tenido que hilar fino para que este sea aprobado. La Cámara de Representantes y el

Senado de Estados Unidos ya lo aprobaron y solo falta la aprobación del Parlamento de Canadá, algo que se da por hecho. Esta aprobación es sin duda importante para México porque atraerá inversión extranjera y estabilizará la economía, pero no deja de ser un trago amargo para un régimen que proclama su anti-neoliberalismo a cuatro voces mientras que firma un tratado de libre comercio esencialmente neoliberal. Estas son las ironías de la historia.

Los programas sociales

Los programas sociales constituyen otra columna del proyecto de transformación. Estos legitiman un régimen que mantiene una relación estrecha con el empresariado, cuyo apoyo necesita para echar adelante el crecimiento económico. Dada esta cercanía con los empresarios, es fundamental que el pueblo vea al Gobierno como suyo, que atiende sus necesidades. Esto explica los recorridos por todo el país, visitando comunidades indígenas, hospitales, zonas afectadas por los sismos de 2017 y 2018, grandes obras, etc. Parte de esta estrategia es la presentación continua de funcionarios del Gobierno federal en las conferencias que informan sobre temas de interés. Estas conferencias y las giras permanentes permiten que Amlo esté en contacto directo con la población y sobre el escenario para tomarle el pulso a la atmósfera política nacional. Igualmente, las conferencias dan la pauta a la noticia diaria y lo convierten en un personaje que está en los medios y, como tal, es tema de conversación. Los programas sociales y las giras continuas por todo el país muestran el “rostro humano” del modelo de capitalismo que Amlo pretende construir. En otras palabras, el Gobierno está cerca del pueblo y atiende a sus necesidades.

En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea que “Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado

intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador,” (Gobierno de México, 2019:35) como se conoce en México a la estrategia de desarrollo ejecutada por los regímenes salidos de la Revolución mexicana. En el Plan se argumenta que el Gobierno reconoce que “los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio... Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales” (Amlo, 2019:141). Este es uno de los grandes retos, pero luce que, por ahora, solo se podrá aminorar los sufrimientos causados por la pobreza esparcida en forma desigual por toda la nación.

La política económica del Gobierno se basa en la idea de que es posible financiar los programas sociales con los ahorros que se obtienen combatiendo a la corrupción y no a través de una reforma fiscal que Amlo propone se haga en la segunda mitad del sexenio. En su lugar, se propone limpiar las instituciones públicas de corrupción, “barrer las escaleras de arriba para abajo,” es decir, reducir los salarios de los altos funcionarios, eliminar instituciones redundantes, consolidar las compras del Gobierno federal, abolir el Estado Mayor Presidencial, crear el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vender el lujoso avión presidencial, autos de lujos, residencias suntuosas, joyas y abandonar la política de condonar impuestos a las grandes empresas, haciendo una promesa por escrito, de que el presidente de la República no condonará impuestos.

Esta promesa se hizo en el contexto de la denuncia de que Calderón y Peña Nieto habían condonado 400,902 millones de pesos a grandes empresas nacionales y extranjeras (Conferencia matutina de Amlo el 22 de mayo 2019). El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para enmendar el Artículo 28 de la Constitución de modo que no se pueda devolver impuestos cobrados a las empresas y no haya condonación. Esta enmienda fue aprobada por el Congreso. En un primer momento, se creyó que esto afectaría la relación con el empresariado,

pero parece que estas diferencias se han suavizado, aunque sí sigue existiendo un sector del empresariado que no está satisfecho después de lo sucedido con el NAICM.

Aunque es cierto que la lucha contra la corrupción ha sido fundamental para financiar los programas sociales, no se puede subestimar el hecho de que la recaudación fiscal es muy baja. México recauda alrededor de 16% anual del PIB mientras que en la región de América latina y el Caribe se recauda un promedio de 21% (OECD, 2019:13, gráfica C). En 2017, se aplicaba un 7% del PIB en inversión social, pero “el presupuesto de 2019 aumentó el gasto de 0.6% del PIB en 2018 a 1% del PIB, aunque la composición cambió notablemente, con una reducción de casi 14% en PROSPERA¹, un aumento de 17% en los programas para jóvenes y una duplicación de la pensión para adultos mayores” (Ibíd, 55-56). Los nuevos programas sociales incluyen: Bienestar para adultos mayores, Personas con discapacidad, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando Vida, reconstrucción para atender a las víctimas de los sismos de 2017 y 2018, mejoramiento urbano y vivienda, universidades Benito Juárez, Banco del Bienestar, Centro Integradores de Servicios Comunitarios, la Escuela es Nuestra y el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi). En 2019, el Gobierno invirtió alrededor de 300 mil millones de pesos en estos programas (Amlo, 2019:143-159). No cabe duda que esto ayuda a reactivar el consumo, pero, sobre todo, coadyuva a ampliar la legitimidad del Gobierno y mostrar que el presidente responde a las necesidades básicas de una población empobrecida por el modelo económico neoliberal que se impuso al país por 36 años.

Los programas sociales son primordiales en la restauración del Estado desarrollista mientras se rescatan empresas públicas esenciales y se propone un programa de construcción de obras públicas en colaboración con el sector privado.

¹ Este programa de la era neoliberal ya fue eliminado.

Por ejemplo, el 26 de noviembre se anunció que la iniciativa privada invertiría 859,022 millones de pesos² (42,951 millones de dólares) en 147 proyectos de infraestructura en los próximos 5 años en telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, trenes urbanos, puertos, aeropuertos, agua, saneamiento, hospitales, turismo, energía, etc. (Conferencia matutina de Amlo, 26 de noviembre 2019).

El anuncio de las inversiones de empresarios es buena noticia para un Gobierno que prácticamente está atado de pies y mano por la deuda heredada de las gestiones anteriores. El Plan Nacional de Desarrollo propone una inversión pública de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero alcanzar esa suma es un reto formidable para un Gobierno que tiene una deuda de 10 billones 758 mil millones de pesos (la deuda interna es 6 billones 909 mil millones de pesos y la externa es de 197 mil millones de dólares). El Gobierno debe pagar 700 mil millones de pesos anuales por las tasas de intereses que esta genera (Galván Ochoa, 2019). Esto explica por qué el Gobierno no quiere aumentar la deuda ni puede aceptar la recomendación de Carlos Slim, empresario aliado de Amlo, quien propone se invierta 5% del PIB cada año (70 millones de dólares). Desde la perspectiva de Slim se pierde la oportunidad de tomar dinero prestado en el extranjero, donde las tasas están sumamente bajas. La deuda es el talón de Aquiles del Gobierno y esta no le permite aplicar una política keynesiana de inversiones públicas que puedan incentivar el crecimiento económico. Esto requiere de una reforma fiscal profunda que aumente los impuestos a los más ricos, pero el Gobierno no quiere entorpecer sus relaciones con los empresarios y la propone para la segunda parte del sexenio. Por esto, precisamente, el Gobierno no cuestiona la legalidad de una deuda contraída por gestiones corruptas que hicieron negociaciones no muy santas. Se podría decir que este es uno de los puntos débiles de la gestión de Amlo.

² Es necesario anotar que el 1 de diciembre de 2019 durante su discurso de primer año de gobierno Amlo dijo que estos proyectos invertirían 709 mil millones de pesos (37,486,957.000 dólares).

Las reformas constitucionales

El rescate del Estado desarrollista va acompañado de una serie de reformas constitucionales que potencialmente aseguran su consolidación. Entre estas se encuentran la ley laboral que garantiza el voto libre y secreto en los sindicatos, ley educativa que cancela la reforma neoliberal, ley de salud para proveer atención médica y medicamentos, ley de extinción de dominio para poder luchar contra el narcotráfico. El fraude electoral y la corrupción son hoy delitos graves. El Congreso ha aprobado la revocación del mandato presidencial y el presidente podrá ser juzgado como cualquiera otro ciudadano. Más aún, se ha enviado al Congreso una reforma para garantizar el derecho de manera permanente pensión a adultos mayores y personas con discapacidad y becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En conjunto, estas reformas sientan las bases para Estado desarrollista y crean, en teoría, un Estado social que había sido debilitado.

Pese a estos logros, no se puede concluir sin mencionar que los retos por delante son enormes. Todavía no se ha podido dar un informe satisfactorio sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ni se ha podido detener el aumento de los asesinatos dolosos causados por la delincuencia organizada que, según la SSPC, al final de diciembre, llegaron a 28,649. Tampoco se ha podido dar cuenta sobre las afectaciones causadas por la construcción de la termoeléctrica de Huesca, Morelos durante la gestión de Peña Nieto. Este tema es espinoso pues se invirtió alrededor de 8,000 millones de dólares en la construcción de dicha planta. Allí se hizo una consulta popular y el resultado fue positivo según el Gobierno, pero parece que aún no se resuelven las demandas de los quejosos entorno al uso del agua para la planta ni el peligro que representa su construcción en una zona sísmica. Además, el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, el 17 octubre de 2019,

para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, puso en tela de juicio la capacidad de las fuerzas castrenses para luchar contra los narcotraficantes. Sin embargo, parece que detener el operativo fue la mejor opción pues se salvaron vidas.

Por otro lado, Morena enfrenta desafíos significativos, pero ha dado la batalla en el Congreso para avanzar una apretada agenda legislativa que ha ayudado al poder Ejecutivo a hacer reformas fundamentales. Sin embargo, este partido parece estar sumido en lucha de facciones políticas que han impedido la realización de un congreso extraordinario para elegir a sus dirigentes. Entre estas corrientes sobresalen una encabezada por Yeidckol Polevnsky, exSenadora de la República y excandidata a gobernadora del Estado de México, quien preside el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y Bertha Luján quien fue Secretaria General de Morena (2012-2015), y actualmente encabeza el Consejo Nacional. Estas dos dirigentes habían acordado celebrar un congreso extraordinario el 30 de noviembre de 2019, pero este no se pudo realizar porque el padrón de miembros no estaba actualizado, éste solo incluía aquellos que se afiliaron antes de noviembre de 2017 y excluía a todos aquellos que llegaron al partido en fechas posteriores. En todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la convocatoria al congreso porque el padrón de militantes no era confiable. El Tribunal ordenó que Morena integrara un nuevo listado para incluir a todos aquellos que solicitaron su afiliación 30 días antes del inicio del proceso. Esta intervención añadió más problemas al partido pues tanto durante la campaña electoral de julio de 2018 como posteriormente se “afilió” a Morena una enorme cantidad de personas cuyos intereses políticos e ideológicos cambiaron su perfil. Uno de estos problemas es que Bertha Lujan se autoproclama como “defensora” de los miembros “puros” que se afiliaron antes de 2017 y se quiere dar la impresión que Polevsky “representa” a los “impuros” que se afiliaron en fecha posterior.

Como consecuencia, no se puede establecer con precisión que en la actualidad Morena sea un partido “humanista, progresista y nacionalista,” como lo definieron sus dirigentes fundadores, sino una formación plural que incorpora todas las tendencias políticas.

Tanto Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján reivindican una trayectoria de lucha en Morena y ser fieles seguidoras de Amlo, pero parece que el crecimiento cuantitativo de Morena y los intereses de grandes figuras políticas que llegaron al partido procedente del PRI y del PRD pueden reducir cualquier intento de radicalizar a Moderna. Entre estas personalidades se encuentran: Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012) y actual Secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaun, exjefa de la Alcandía de Tlalpan (2015-2017) y, en este momento, Jefa de Gobierno de la CDMX y el influyente exgobernador de Zacatecas (1998-2004), Ricardo Monreal, y ahora coordinador de los senadores de Morena en el Congreso. Estas tres figuras parece que tienen aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2024 y, como tal, procuran que Morena adquiera cierta autonomía en relación al presidente de la República, pero esto aún no se logra. Sin embargo, dada sus trayectorias y sus posiciones políticas actuales, estas figuras son menos radicales que Amlo y se parecen más al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo proyecto político es igualmente moderado. De modo que, dadas estas perspectivas, parece que el proceso de cambio mexicano no se moverá hacia una izquierda radical y que pueda convertirse en una especie de faro progresista en la región.

Sin embargo, por ahora, el gran reto de Morena es celebrar su congreso y prepararse para las elecciones de medio término en 2021. Si estos problemas no se resuelven a la brevedad, se afectaría a los proyectos del Gobierno pues, sin control del Congreso, no se podrá seguir legislando para profundizar las reformas constitucionales del nuevo régimen.

Conclusión

Dada la adversidad del contexto regional e internacional actual, la gestión de Amo ha logrado avances significativos en la realización de las promesas que hizo durante su campaña electoral. El inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas, el rescate de Pemex y la CFA, el inicio de la construcción del Tren Maya y los programas sociales, dan inicio a la restauración del Estado desarrollista como entidad rectora en la sociedad. Asimismo, el Gobierno empezó una lucha frontal contra la corrupción permitiéndole hacer grandes ahorros que se utilizan para financiar los nuevos programas sociales que le dan legitimidad ante la mirada de la ciudadanía. Las enmiendas a la Constitución en su conjunto constituyen una reforma constitucional que ayuda a sentar las bases para un Estado de derecho. Sin embargo, los retos son extraordinarios: la lucha contra el narcotráfico y la violencia que éste genera sigue como materia pendiente, la migración centroamericana, la conformación de la GN, los problemas internos de Morena y las relaciones problemáticas con Estados Unidos y la aprobación del T-MEC son desafíos formidables.

Por ahora, luce que el éxito relativo de la gestión de Amlo no ha sido bien aprovechado por las facciones políticas que se disputan la dirección de Morena. Estas corrientes no se distinguen de la posición de Amlo, la cual es mucho menos radical que las que observamos en los Gobiernos progresistas de Hugo Chávez (Venezuela) Rafael Correas (Ecuador) y Evo Morales. Por oposición a estos Gobiernos, que nacionalizaron empresas extranjeras y renegociaron contratos poco ventajosos, Amlo se ha limitado renegociar los gaseoductos y ha prometido no cuestionar los contratos contraídos por las gestiones anteriores, aun cuando estos sean lesivos a los intereses nacionales. En resumen, su gestión consiste de un

enfoque moderado para cuestionar el neoliberalismo y propone un modelo de “capitalismo con rostro humano” que atienda las necesidades básicas de la población en materia de seguridad, salud, educación y empleo, pero nunca cuestionar las bases del capitalismo.

Bibliografía

Fazio, Carlos

2019 “El Tren Maya: la consulta y el despojo,” *La Jornada*, recuperada de <https://www.lajornada.unam.mx>, 16 de diciembre.

Galván Ochoa, Enrique

2019 “Dinero,” *La Jornada*, recuperada el 31 de diciembre de <https://www.jornada.unam.mx>

Gobierno de México.

2019 Discurso integro de Amlo en el Zócalo, recuperado el 1 de diciembre <https://www.animalpolitico.com/2019/07/amlo-discurso-completo-zocalo-informe/>

---.19 *Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024*. Recuperado el 18 de noviembre de 2019 de <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>

---.2019 Conferencia matutina de Amlo. Recuperadas en las siguientes fechas: 23 de abril, 22 de mayo, 27 de agosto, 6 de septiembre, 9 de septiembre, 4 de noviembre, 26 de noviembre, 16 y 26 de diciembre en <https://www.conferencia+de+prensa+de+amlo+23+de+abril+de+2019+en+youtub&rlz=1C1G>

Jornada

2019 “El gobierno descalifica críticas de la ONU-DH a consulta Tren Maya,” *La Jornada*, recuperada de <https://www.lajornada.unam.mx>, 24 de diciembre.

Langner, Ana

2019 “Consulta por Tren Maya no cumple estándares internacionales: ONU” La Jornada, recuperada en <https://lajornada.unam.mx>, 19 de diciembre.

López Obrador, Andrés Manuel

2019 *Hacia una economía moral*. México, Editorial Planeta.

OCDE

2019 *Estudios económicos de la OCDE México*. OECD Publishing, Paris.

Pérez, Ana Lilia

2011. *El cartel negro. Como el crimen organizado se ha apoderado de Pemex*. Grijalbo, México.

---. 2019 *Pemex rip. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana*. Grijalbo, México.